

Empoderamiento Jurídico:

una vía para fortalecer y amplificar
narrativas comunitarias





Sobre la Grassroots Justice Network

La Grassroots Justice Network es una comunidad global de más de 18.000 miembros de 190 países que reúne a quienes trabajan por defender la justicia para que conecten, aprendan y actúen conjuntamente. Usamos el enfoque del empoderamiento jurídico para ayudar a las comunidades a conocer, usar y (trans)formar el derecho, y para conseguir cambios duraderos contra las injusticias. En Latinoamérica, la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico es el capítulo regional de la Grassroots Justice Network.

La Grassroots Justice Network es convocada por Namati, una organización sin ánimo de lucro dedicada a avanzar la justicia social y ambiental a través de la construcción de un movimiento de personas que conocen, usan y (trans)forman el derecho.

La Agenda de Aprendizajes por el Empoderamiento Jurídico reúne a miembros de la red para que evalúen sus estrategias, profundicen su impacto y aborden colectivamente las lagunas de conocimiento a las que se enfrenta nuestro movimiento global por la justicia.



Sobre las y los autores

Carlos Asúnsolo es Gerente Senior en Namati y abogado de derechos humanos de México con amplia experiencia en empoderamiento jurídico, justicia ambiental y política pública. Ha liderado investigación y formación regional en justicia climática.

Claudia Cote es Oficial Senior de *Grassroots Justice Network* en Namati. Tiene amplia experiencia en defensa de derechos humanos y seguridad, con trayectoria en cooperación internacional y sociedad civil.

Poorvi Chitalkar es Gerente Senior en Namati, donde colabora con profesionales para probar estrategias y co-crear nuevos conocimientos que fortalezcan el movimiento global de justicia desde las bases. Entre 2020 y 2025, lideró la Agenda de Aprendizaje sobre Empoderamiento Legal, un esfuerzo de aprendizaje a nivel de campo que utilizó investigación-acción participativa para explorar cómo el empoderamiento legal puede impulsar cambios sistémicos. Es autora de [The Playbook of Justice: How Legal Empowerment Efforts are Fighting Repression and Deepening Democracy](#).

Agradecimientos

Este documento surge de un proyecto de investigación-acción implementado por ProDESC, ACIJ y FIMA, con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y Asuntos Globales de Canadá (GAC). Agradecemos profundamente a todas las partes por hacer posible este trabajo y por contribuir al avance de los derechos de comunidades históricamente marginadas en México, Argentina y Chile.

Agradecemos la colaboración cercana de integrantes actuales y anteriores de ProDESC, ACIJ y FIMA, en particular a Lautaro Costantini, Gabriel Gustavo Rocha Belloni, Daniel Pacheco Álvarez y Marlene Rodríguez Atriano (ProDESC); Catalina Marino, Florencia Abed Dickson y Pablo Vitale (ACIJ); y Felipe Cárcamo, Macarena Martinic y Gabriela Simonetti (FIMA).

Asimismo, agradecemos a Luciana Bercovich, Senior Manager de la Grassroots Justice Network, por sus comentarios y revisiones; a Karla Sandoval por la edición del texto; a Claudia Cote por las modificaciones; y a Emilia López por el diseño.



Este trabajo se llevó a cabo gracias a la ayuda de una subvención otorgada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o las de la Junta de Gobernadores.

Citar como: Namati. *Empoderamiento jurídico: una vía para fortalecer y amplificar narrativas comunitarias*. Namati, 2025.

En colaboración con



Introducción

América Latina atraviesa un periodo de retroceso democrático que se manifiesta en el debilitamiento de las instituciones, la concentración del poder y la reducción de los espacios de participación ciudadana. Aunque esta tendencia adopta distintas formas según el país, comparte un patrón: la criminalización de la protesta, la estigmatización de las organizaciones sociales y la creciente indiferencia estatal hacia los derechos humanos. Estos procesos afectan directamente la capacidad de las comunidades para organizarse, participar y defender sus territorios.

Más allá de lo institucional, esta crisis también redefine cómo se entienden el desarrollo, la justicia y el progreso. Las narrativas políticas dominantes —modernización, transición energética, desarrollo sustentable— funcionan como instrumentos de poder que determinan qué demandas son legítimas y quién tiene derecho a influir en el debate público.

En contextos de participación limitada, disputar estas narrativas se convierte en un terreno central de lucha: las comunidades pueden ser silenciadas no solo por mecanismos legales, sino también por discursos que las deslegitiman o las presentan como barreras al progreso.

En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base son fundamentales. Actúan como contrapesos ante tendencias autoritarias, protegen derechos y crean espacios para el ejercicio del poder colectivo. El empoderamiento jurídico fortalece este trabajo al combinar el uso estratégico del derecho con la organización comunitaria, permitiendo que las personas conozcan, utilicen y transformen las normas que afectan sus vidas.

El empoderamiento jurídico no solo facilita el acceso a la justicia: también impulsa la capacidad de las comunidades para desafiar el poder y construir alternativas basadas en sus propias realidades.

Este análisis surge del trabajo de tres organizaciones –ACIJ (Argentina), FIMA (Chile) y ProDESC (México), que participaron en un esfuerzo global de aprendizaje colectivo de varios años que utilizó un proceso de investigación-acción participativa para generar conocimiento sobre cómo el empoderamiento legal puede impulsar cambios sistémicos.

Cada una de estas organizaciones ha trabajado junto a comunidades históricamente marginadas —urbanas, indígenas o agrarias— que enfrentan graves impactos ambientales y exclusión de los procesos de toma de decisiones.

A lo largo de este recorrido, el papel de las narrativas emergió como un eje clave: los discursos no solo condicionan los obstáculos que enfrentan las comunidades, sino también las estrategias que desarrollan para resistir.

Este documento sintetiza las principales conclusiones de esa experiencia. Examina cómo estas organizaciones utilizan el empoderamiento jurídico para disputar narrativas dominantes, sostener luchas comunitarias e imaginar futuros más justos. En todos los casos, discursos oficiales han legitimado políticas regresivas en nombre del desarrollo o la eficiencia; frente a ello, las comunidades muestran que la lucha por la justicia ocurre tanto en las instituciones como en el terreno de los significados.

Acompañar la lucha por la justicia en contextos políticos difíciles

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ)

La cuenca Matanza-Riachuelo, en Argentina, es una de las más contaminadas de América Latina. Como consecuencia del reclamo de personas afectadas, la Corte Suprema dictó la Causa Mendoza, en 2008, ordenando limpiar la cuenca; proteger la salud de la población y garantizar la participación comunitaria. A pesar de esto, barrios populares de Buenos Aires como Villa 21-24 y Villa Inflamable continuaron enfrentando precariedad de servicios públicos, contaminación y riesgos para la salud, mientras que su participación era limitada.



Foto: Líderes barriales manifestándose en contra del Cierre de la Causa Mendoza, Argentina, 2025

Estas condiciones fomentaron una profunda desconfianza y una sensación de abandono por parte del Estado. En respuesta, ACIJ colabora con grupos vecinales para promover la integración socio-urbana mediante incidencia, acciones legales, capacitación e investigación comunitaria. Su objetivo es construir poder colectivo, fortalecer la participación y hacer que el Estado rinda cuentas.

El reciente cambio de un gobierno que había asumido algunos compromisos a una administración de extrema derecha, liderada por Javier Milei, ha supuesto un nuevo reto para las comunidades. La nueva gestión introdujo una retórica contraria a los derechos y políticas de austeridad que profundizan la erosión del liderazgo comunitario y la participación ciudadana.

Es importante precisar, sin embargo, que el cierre del Caso Mendoza en 2024 no estuvo relacionado con este cambio de gobierno. El incumplimiento sostenido de las obligaciones estatales y el abandono de los barrios de la cuenca son problemas estructurales que se arrastran desde administraciones anteriores, incluidos gobiernos peronistas. El cierre de la causa respondió a esa larga trayectoria de falta de implementación más que a decisiones de la nueva administración. Aun en este contexto adverso —marcado por políticas de ajuste y por el desgaste acumulado tras años de incumplimientos estatales—, ACIJ continúa acompañando los procesos locales y defendiendo los derechos de quienes viven en la cuenca.

FISCALÍA DEL MEDIO AMBIENTE (ONG FIMA)

FIMA trabaja en la patagonia chilena, en Magallanes, donde las comunidades Kawésqar se enfrentan a amenazas constantes por parte de las industrias extractivas que invaden sus tierras ancestrales. La expansión de la cría de salmones en áreas protegidas ha dañado los ecosistemas marinos y ha afectado la forma de vida ancestral.

A su vez, en la estepa chilena, se han impulsado proyectos de hidrógeno verde a gran escala con poca participación ni transparencia, lo que ha profundizado la exclusión local de la toma de decisiones en el territorio. En respuesta, FIMA lidera acciones de empoderamiento jurídico que combinan litigios ambientales, acciones administrativas y apoyo comunitario. Su trabajo ha documentado los impactos de la industria e incluso ha revocado concesiones de salmoneras. Además, ha fortalecido la capacidad de las comunidades para utilizar herramientas legales en la defensa territorial, que ahora se extiende a los proyectos de hidrógeno. FIMA enfrenta un gran desafío, ya que el gobierno mantiene un discurso verde mientras, a su vez, mantiene y profundiza prácticas extractivas. El gobierno, además, ha debilitado las regulaciones ambientales para acelerar los proyectos energéticos con el pretexto de la urgencia climática. La experiencia de FIMA pone de relieve las contradicciones entre el discurso progresista y las prácticas regresivas para las comunidades de Magallanes.

PROYECTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, A.C. (PRODESC)

ProDESC trabaja en la península de Yucatán, en México, un territorio históricamente disputado por intereses económicos, políticos e incluso criminales sobre la tierra y los recursos naturales. En los últimos años, los megaproyectos turísticos, energéticos y de infraestructura han acelerado el despojo de las comunidades. Las comunidades mayas alrededor de la laguna de Chichankanab se enfrentan a la presión constante de actores públicos y privados que buscan imponer proyectos turísticos. En respuesta, ProDESC fortalece las capacidades organizativas y jurídicas de las comunidades para ejercer sus derechos territoriales. Apoya a las asambleas ejidales (órganos de propiedad colectiva) en la defensa de la tierra, fomenta la coordinación política en torno a la laguna y promueve el acceso de las mujeres a ella. A través de acciones legales, capacitación y promoción, ProDESC busca detener el despojo y reconstruir el poder colectivo para enfrentar los modelos de desarrollo impuestos desde afuera. El trabajo de ProDESC se desarrolla bajo un gobierno se autodenimina de izquierda, pero que ha profundizado la militarización y promovido megaproyectos. A esto se suma una reforma judicial que amenaza la independencia y la creciente cooptación de las autoridades comunitarias, socavando aún más la rendición de cuentas democrática.

Contextos políticos y narrativas cambiantes

En momentos de transición política, los cambios de poder no se limitan a las instituciones, sino que también transforman el terreno simbólico en el que se construye la legitimidad. Las nuevas narrativas estatales presentan a menudo a los movimientos sociales y las luchas comunitarias como obstáculos para el progreso o como actores ajenos al bien público. Este replanteamiento socava el significado de sus demandas. Incluso se llega a presentar a las organizaciones de la sociedad civil como agentes extranjeros u oponentes al desarrollo, reduciendo el debate público a simplistas modelos binarios de a favor o en contra. Cuando estas narrativas se afianzan, los movimientos se enfrentan al reto de defender no solo sus derechos, sino también la propia legitimidad de sus causas.



Foto: Miembros de ACIJ, FIMA y Panel Ciudadano H2, Chile, 2024.



En este contexto, el empoderamiento jurídico se convierte en una herramienta para cuestionar las formas institucionales y simbólicas del poder. Las experiencias de ACIJ, FIMA y ProDESC revelan cómo cada organización se enfrenta y redefine las narrativas dominantes para mantener sus luchas y seguir siendo actores creíbles en la esfera pública.

LOS DISCURSOS DE LA EXTREMA DERECHA

En Argentina, la llegada de Javier Milei a la presidencia marcó un cambio radical en el discurso político. Más allá de los cambios institucionales, su gobierno estableció una narrativa agresiva contra los derechos humanos y los movimientos sociales, la cual presenta los derechos como privilegios y al Estado como un obstáculo para el desarrollo, mientras eleva al mercado como la principal fuente de soluciones. Respaldado por un amplio apoyo popular y una crisis económica, este discurso se enfocó en la inflación, el déficit fiscal y los costos de los servicios, al calificar las narrativas basadas en los derechos como obsoletas o ideológicas.

Para ACIJ, este contexto exige replantearse cómo comunicar los derechos humanos. La organización ahora basa su defensa en realidades concretas. En lugar de invocar el «derecho al agua», subraya que muchos barrios pasan semanas sin agua en verano. Este cambio de los derechos abstractos a la falta concreta ayuda a conectar con las preocupaciones ciudadanas y a desafiar el entendimiento público sobre lo que es justo.

ACIJ refuerza esta estrategia con documentación participativa y pruebas concretas. En Villa 21-24, cuando se detuvieron las obras de mejora del agua, organizó una encuesta en el barrio, publicó los datos y presionó con éxito a las autoridades para que reanudaran el proyecto. Combinando pruebas, participación comunitaria y un lenguaje accesible, ACIJ recupera la legitimidad dentro de un discurso dominado por la urgencia económica.

En síntesis, este enfoque demuestra que cuestionar la narrativa no es solo una cuestión de comunicación, sino una acción profundamente política: un esfuerzo por redefinir el sentido común, elevar las perspectivas de la comunidad y reafirmar los derechos como pilar de la vida pública.

LO QUE SE ESCONDE EN LOS DISCURSOS VERDES

En Chile, el gobierno progresista de Gabriel Boric llegó al poder prometiendo justicia social y liderazgo medioambiental. Magallanes, con sus condiciones naturales favorables, se convirtió en el lugar ideal para su desarrollo. La urgencia se convirtió en un discurso clave: Chile tenía que actuar rápido o perdería su ventaja competitiva. Este discurso justificó la reducción de las salvaguardias ambientales (como evaluaciones y consultas comunitarias), al reformularlas como obstáculos para el progreso.

De esta manera, el impulso del hidrógeno verde evidenció los límites de un gobierno progresista que, si bien prometía una transformación, terminó reproduciendo prácticas extractivas e intervenciones verticales.



Foto: Parque Nacional Pali Aike, Chile, 2024.



En 2023, surgió el Panel Ciudadano sobre el Hidrógeno en Magallanes, un espacio autónomo que reúne a organizaciones sociales, académicos y líderes comunitarios. FIMA es parte del Panel y aporta su experiencia jurídica y de incidencia política. El Panel busca democratizar el debate sobre el modelo de desarrollo de la región, exigiendo transparencia, acceso a la información y una evaluación crítica de los proyectos de hidrógeno verde.

En lugar de rechazar los proyectos, el Panel cuestiona las condiciones bajo las que se impulsa el desarrollo y exige pruebas de los beneficios prometidos. Al replantear su postura, desafía el optimismo oficial sin parecer obstruccionista, con preguntas clave: ¿Cuáles son los impactos ambientales reales? ¿Qué beneficios tangibles recibirá Magallanes? ¿Por qué no hay evaluaciones de impacto acumulativo?

Esta estrategia traslada la carga de la prueba a los promotores del proyecto, a la vez que legitima el escepticismo como una investigación responsable. Sin embargo, el Panel sigue enfrentándose a retos, especialmente para integrar las preocupaciones sociales y económicas en un debate dominado por argumentos técnicos. Para avanzar, debe transformar su narrativa de reactiva a proactiva, articulando no solo sus cuestionamientos, sino también la visión de futuro que imagina para Magallanes: un equilibrio entre la protección del medio ambiente, la participación local y el desarrollo equitativo.

EL ESTIGMA DE POSICIONARSE “CONTRA EL PROGRESO”

En México, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han consolidado un proyecto popular de izquierda con una legitimidad sin precedentes. Este amplio apoyo ha disminuido el costo político de marginar a la sociedad civil, lo que ha restringido los espacios de diálogo para organizaciones como ProDESC. Criticar las políticas gubernamentales ahora puede ser fácilmente desechado como oposición o elitismo.

Bajo la bandera de llevar el desarrollo a las regiones marginadas, el gobierno ha promovido megaproyectos en zonas históricamente empobrecidas del país, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, presentándolos como motores de crecimiento. Sin embargo, estas iniciativas a menudo reproducen el despojo territorial bajo el pretexto del progreso. Cuestionarlas implica dudar de las promesas de un bienestar largamente esperado. Esta es una tarea políticamente delicada para las organizaciones que defienden los derechos de las comunidades.

Aunque el caso de la laguna de Chichankanab, en Dziuché, no es un megaproyecto de infraestructura, también refleja una forma de despojo, aunque más sutil, impulsada desde el gobierno estatal en alianza con actores privados. Cuando el Estado declaró el Área Natural Protegida sin el consentimiento del ejido, restringió prácticas tradicionales de subsistencia en nombre de la conservación, mientras facilitó proyectos ecoturísticos respaldados por intereses institucionales y privados. Este proceso — apoyado por la ONG Amigos de Sian Ka'an— utilizó una narrativa ambientalista para legitimar decisiones que afectaron los derechos territoriales y culturales del pueblo maya.

En este sentido, los gobiernos estatales y municipales de Morena se han apoyado en la popularidad del partido para legitimar acciones que cuentan con bajo escrutinio público, incluso cuando reproducen dinámicas de exclusión. Chichankanab muestra cómo el discurso del desarrollo y la conservación puede ser instrumentalizado en distintos niveles de gobierno para avanzar agendas que no responden a las decisiones comunitarias.

Con esta estrategia, ProDESC busca romper las narrativas dominantes al demostrar que el progreso «verde» a menudo conlleva costos sociales, ambientales y culturales ocultos, y reivindica la defensa del territorio como un acto de cuidado, no de oposición.

En México, el gobierno promueve el turismo y los megaproyectos energéticos en el sureste del país bajo la bandera del desarrollo y la justicia social. Al enmarcarlos como iniciativas para «pagar la deuda histórica» con las regiones marginadas, se desactivan las críticas y se refuerza la idea de que oponerse a ellos equivale a rechazar el progreso. A nivel local, estas narrativas se ven reforzadas por discursos sobre el ecoturismo y la conservación, que enmascaran el despojo y legitiman la apropiación del territorio.



Foto: ProDESC y comunidades mayas conociendo sobre derecho ejidal, México, 2024.

Reflexiones transversales sobre las narrativas

1

Las narrativas son un campo de disputa.

2

Las narrativas eficaces deben basarse en la experiencia real de las comunidades.

3

Las narrativas son herramientas de defensa y de construcción de futuros posibles.

4

Las narrativas tienen límites, y es crucial reconocer que no sustituyen a la acción colectiva ni a la organización política.

5

La transformación narrativa requiere creatividad y adaptabilidad.

Lecciones en Participación, Organización y Género

1

Las narrativas son un campo de disputa.



El empoderamiento jurídico va más allá de los tribunales y las instituciones: implica cuestionar los significados en los que se basa el poder. Dar forma a las narrativas públicas es esencial para mantener la legitimidad de las luchas basadas en los derechos. Las narrativas definen qué actores son legítimos, qué problemas son visibles y qué soluciones se consideran posibles.

2

Las narrativas eficaces deben basarse en la experiencia real de las comunidades.



El lenguaje de los derechos cobra fuerza cuando se basa en las realidades cotidianas y se expresa a través de las voces de las comunidades afectadas. En Buenos Aires, la historia de un barrio sin agua puede movilizar más que un informe técnico. En Magallanes, una pregunta bien formulada puede abrir el debate que un discurso cerrado intenta silenciar.

En Yucatán, un testimonio colectivo puede dismantelar la fachada verde de la desposesión. Al conectar las reclamaciones legales con experiencias tangibles, como la falta de agua o las amenazas a la tierra, las organizaciones hacen que los derechos sean comprensibles y reconstruyen la legitimidad desde cero. La fuerza de las narrativas radica en su capacidad para conectar con la vida real de las personas.

3

Las narrativas son herramientas de defensa y de construcción de futuros posibles.



En contextos de cierre democrático, las narrativas tienen una doble función: sirven para resistir los discursos hegemónicos y para imaginar futuros alternativos. Son tanto una defensa como una herramienta de esperanza. Al documentar realidades vividas (escasez de agua, degradación ambiental o despojo encubierto), organizaciones como ACIJ, FIMA y ProDESC utilizan la narrativa para recuperar la visibilidad y cuestionar los significados dominantes. Al mismo tiempo, sus historias imaginan futuros alternativos: derechos basados en las necesidades cotidianas, participación en la forma en que se define el desarrollo y justicia en la vida comunitaria.

4

Las narrativas tienen límites, y es crucial reconocer que no sustituyen a la acción colectiva ni a la organización política.



Sin procesos comunitarios sólidos, las narrativas pueden convertirse en discursos vacíos, incapaces de transformar la realidad material. Su poder reside en su articulación con el trabajo jurídico, pedagógico y organizativo que las sustenta. En estrategias de empoderamiento jurídico, ninguna herramienta funciona sola. Las narrativas son un elemento importante en la lucha por la justicia, pero estas no funcionan por sí mismas.

5

La transformación narrativa requiere creatividad y adaptabilidad.



Los actores del empoderamiento jurídico deben ajustar continuamente su narrativa a los contextos políticos cambiantes. Para lograrlo, traducen ideas jurídicas complejas en mensajes accesibles y utilizan datos, arte y conocimientos locales para reimaginar lo que significa la justicia en tiempos de cambio. Así, por ejemplo, en Argentina, ACIJ utiliza la fotografía comunitaria para revelar la exclusión y recuperar la visibilidad. En México, ProDESC aplica la cartografía participativa en torno a la laguna de Chichankanab para cartografiar el despojo y defender la tierra colectiva. Estas herramientas creativas convierten las pruebas en poder narrativo.



@GlobalNamati
namati.org



COMUNIDAD
LATINOAMERICANA
DE EMPODERAMIENTO
JURÍDICO

@grassrootsJN
grassrootsjusticenetwork.org